PERIÓDICO | PÁGINA | FECHA | SECCIÓN
EL INDEPENDIENTE | PP,9 | 23/07/2025 | LEGISLATIVO
CÁMARA DE DIPUTADOS LXVI LEGISLATURA SOBERANÍA Y JUSTICIA SOCIAL

VAN CONTRA EL *CÁRTEL* INMOBILIARIO DEL PAN

Apoya Sheinbaum crear una comisión para investigar transas de Jorge Romero, líder del PAN; Durante años operó un entramado de corrupción inmobiliaria en la Benito Juárez; cortina de humo de la 4T, responden panistas

Por Redacción / *El Independiente* ► 9

Van contra el cártel inmobiliario del PAN

Por Redacción / *El Independiente*

La presidenta Claudia Sheinbaum dio el visto bueno a la creación de una comisión especial para investigar al cartel inmobiliario.

Durante la conferencia matutina de este martes, la Jefa del Ejecutivo respaldó la propuesta que presentó Arturo Ávila, integrante y vocero de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, sobre crear una comisión especial para investigar al llamado 'cártel inmobiliario' en la Ciudad de México. Esta comisión investigará las transferencias sospechosas de familiares de Jorge Romero, presidente nacional del PAN.

Foto: archivo Cuartoscuro

Foto: archivo Cuartoscuro

"Está bien si así lo decide el Congreso, que se abra la investigación, está en sus facultades", dijo la presidenta Sheinbaum.

Hay bastante sustento de lo que fue el cartel inmobiliario en la mencionada alcaldía, la cual siempre ha sido gobernada por el PAN, reiteró.

Recordó que cuando estuvo al frente de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, la fiscalía local a cargo de la entonces fiscal Ernestina Godoy realizó una investigación en torno a este caso, y hay varios detenidos, algunos de ellos relacionados con el PAN y con los gobiernos en la alcaldía en Benito Juárez.

La presidenta Sheinbaum relató que cuando ella estuvo en la Jefatura de Gobierno de la CDMX notó irregularidades en la alcaldía Benito Juárez por lo que, a raíz de la explosión de un tanque de gas en un departamento, se inició la investigación que poco a poco fue llegando a más casos.

Foto: archivo Cuartoscuro

"Cuando estuvimos en la Jefatura de Gobierno de la CDMX, fue cuando abrimos esa investigación porque resulta que ocurre un episodio de un tanque de gas que explota en un departamento de la alcaldía Benito Juárez, y cuando hace la investigación de oficio de la Fiscalía General de Justicia, encuentra que todos los departamentos están a nombre de una persona", explicó la presidenta.

La mandataria detalló que conforme la investigación avanzó salieron a relucir más edificios vinculados con violaciones en el uso de suelo.

"Empieza a encontrar que hay otros departamentos, y otros departamentos y otros edificios, y otros edificios, vinculados con violaciones en el uso de suelo.

Entonces la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda inicia una investigación y encuentra que hay muchos edificios en la Benito Juárez que violan el uso de suelo, que deberían tener 3 pisos y tienen 5", puntualizó Sheinbaum.

La presidenta mencionó que hubo personas involucradas que devolvieron dinero para librar cargos y agregó que hubo un modus operandi.

"En ese proceso varios empresarios deciden colaborar con la investigación y ahí dicen a quiénes entregaron el dinero a partir de moches y a eso se le llamó el 'cartel inmobiliario'. (…) Algunas personas devolvieron dinero para poder quitar parte de sus cargos, personajes incluso que pasaron años en la misma posición en la alcaldía Benito Juárez. Sí hubo un modus operandi", sentenció la presidenta de México.

LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados propuso la creación de la comisión de investigación sobre las responsabilidades políticas y administrativas de servidores públicos involucrados en el 'cártel inmobiliario'.

De acuerdo con Morena, dicho cártel estaría presuntamente encabezado por Jorge Romero, actual presidente nacional del PAN, y quien fue jefe delegacional de Benito Juárez entre 2012 y 2015.

El legislador de Morena, Arturo Ávila, anunció la presentación de un punto de acuerdo para solicitar la creación de la comisión de investigación al Cártel Inmobiliario y aprovechó para señalar a Jorge Romero como responsable del mismo.

"Hemos presentado un punto de acuerdo para crear una comisión especial que investigue al llamado cártel inmobiliario, una red de corrupción que saqueó a la alcaldía Benito Juárez, y que presuntamente tiene nombre y apellido, Jorge Romero, presidente nacional del PAN", expuso Ávila.

Sin dar nombres, el legislador morenista recordó que debido a las investigaciones que se abrieron en aquel momento fueron encerrados funcionarios relacionados a este caso.

"Romero ha estado en el centro de un escándalos que ya dejó detenidos, que tiene carpetas de investigación, hay exfuncionarios que estuvieron o que están presos por enriquecimiento ilícito; incluso algunos de sus colaboradores ya tienen cargos que pueden estar relacionados por lavado de dinero, hay más de 100 inmuebles con irregularidades detectadas por la Fiscalía de la CDMX", detalló.

RESPUESTA DEL PAN

Por su parte, el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, José Elías Lixa, respondió que su partido no tiene miedo y calificó la propuesta como una 'cortina de humo' a las supuestas conexiones "evidentes" que tiene Morena con el crimen organizado.

Foto: archivo Cuartoscuro

"Las conexiones entre Morena y el crimen organizado ya no son una sospecha, (…). Por eso hemos pedido que se investiguen todos los vínculos de integrantes del gobierno que se han vendido al crimen organizado. ¿Y qué hace Morena cuando se siente acorralado? Según ellos, intimidar y amenazar a sus opositores, buscando crear cortinas de humo para desviar la atención", argumentó Elías Lixa.

El panista terminó por aclarar que en su partido no existe el miedo y que todas las comisiones de investigación serán bien recibidas.

"¡Qué les quede claro! En el PAN no hay miedo, ni un poquito. Bienvenidas todas las comisiones de investigación que quieran", concluyó.

CORRUPCIÓN Y PRIVILEGIOS EN LA CDMX

Durante años, un entramado de corrupción inmobiliaria operó impunemente en la Ciudad de México, particularmente en la alcaldía Benito Juárez, bajo el amparo de servidores públicos, constructores y empresarios que violaron leyes urbanas, lucraron con el suelo y atentaron contra el derecho a la ciudad de miles de habitantes.

El llamado Cártel Inmobiliario consistía en una red criminal que facilitaba permisos de construcción ilegales a cambio de sobornos, favores políticos y beneficios económicos.

La investigación, impulsada por la Fiscalía General de Justicia capitalina, ha revelado una compleja estructura de colusión entre exfuncionarios panistas de alto nivel, desarrolladores inmobiliarios y servidores públicos encargados de verificar el cumplimiento normativo en materia de uso de suelo y protección civil.

LOS IMPLICADOS

Entre los implicados se encuentran exalcaldes, exdirectores de obras y servidores públicos de Benito Juárez, demarcación que durante más de una década ha sido gobernada por el PAN.

A través de licencias apócrifas, cambios irregulares en los polígonos de actuación y el uso discrecional de autorizaciones, se permitió la construcción de pisos adicionales, la operación de edificios sin dictámenes de seguridad e incluso la ocupación de inmuebles colapsados tras el sismo de 2017.

El gobierno de la CDMX ha insistido en que no se trata de un tema partidista, aunque la mayoría de los implicados han sido militantes del PAN.

Mientras tanto, diversas organizaciones civiles han exigido que las investigaciones no se limiten a una "limpia selectiva" sino que se amplíen a otras alcaldías, donde también se han detectado prácticas similares.

El caso del Cártel Inmobiliario expone una de las caras más peligrosas de la corrupción urbana: aquella que se esconde tras fachadas modernas, promesas de desarrollo y crecimiento económico, pero que opera en beneficio de unos cuantos, a costa del interés colectivo.

Al menos 16 funcionarios públicos han sido llevados a proceso por ser señalados como parte del Cartel Inmobiliario, un exalcalde, tres ex directores generales, dos exdirectores, un exsubdirector, un particular, un contratista, un trabajador por honorarios y una gestora, además de cinco servidores públicos más eran investigados en noviembre de 2023, de acuerdo a la entonces fiscal Ernestina Godoy.

Foto: archivo Cuartoscuro